H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

Presente

A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que crea la Ley de Asunción de Paternidad del Estado de Colima, y

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que mediante oficio número 0714/013, de fecha 02 de mayo de 2013, los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que crea la Ley de Asunción de Paternidad del Estado de Colima, presentada por Marcos Daniel Barajas Yescas, Diputado Único del Partido del Trabajo, de la Quincuagésima Séptima Legislatura.

SEGUNDO.- Que la Iniciativa en sus argumentos que la sustentan señala que:

- Para el Partido del Trabajo es importante garantizar a los grupos más vulnerables sus derechos, que en este caso me refiero a los niños y niñas nacidos en el Estado de Colima, y que no son reconocidos por sus padres al momento de nacer, haciendo que la madre sola sufra para poder mantener a su recién nacido, y aunque existe actualmente los mecanismos jurídicos para reconocer a los menores, estos son lentos por la carga de trabajo de los Juzgados, por lo que me veo en la necesidad de apoyar a estas madres, que a pesar de todo lo que viven durante y después del embarazo no es fácil para ellas conseguir un empleo para alimentar a su bebé, es por ello, que propongo en este recinto legislativo la Ley de Asunción de Paternidad del Estado de Colima, entendiéndose por asunción la admisión o aceptación de dicha paternidad, la cual es una herramienta administrativa para tratar de agilizar el procedimiento del reconocimiento hacia los hijos, con ello, buscamos garantizar el interés superior de las y los niños para tener nombre y apellido y tener una identidad, tratando de que el mecanismo del Estado representado por el Registro Civil, la Secretaria de Salud y otras Instituciones, caminen a la par para garantizar los derechos de los niños y las niñas. Entiéndase por el principio del interés superior del niño y niña como todo aquello que favorezca su pleno desarrollo físico, psicológico, moral, cultural, social en consonancia con la evolución de sus facultades y que le beneficie en su máximo grado.
- El hecho de que un niño o niña sea reconocido o reconocida legalmente por sus progenitores, no solo le da identidad, sino que también le da derecho a ser cuidado por su padre y su madre, naciendo la responsabilidad legal de éstos de

alimentar, educar, proteger y atender íntegramente de sus hijos.

- Esta iniciativa de Ley procurará que desde el momento de nacimiento del niño o niña colimense se establezca ante la Oficina del Registro Civil que corresponda, una presunción del nombre del padre, que no ha querido reconocer al menor, por lo que se abrirá un pequeño procedimiento administrativo para darle audiencia y defensa a quien se le imputa dicha paternidad, siendo la base fundamental para demostrar la paternidad la prueba biológica comparativa de marcadores genéticos (o prueba del ADN), que podrá hacerse al padre para demostrar lo contrario, en caso de que el padre no quiera realizarse la prueba, se tendrá declarada la presunción de la paternidad, sin embargo, en caso de que la madre mienta sobre la paternidad habrá para ella responsabilidades civiles y penales y sobre todo será ella quien corra con los gastos que se generen para la elaboración de la prueba genética.
- Esta Ley solo tendrá aplicación en el Estado de Colima, por lo que si el padre radica fuera del Estado no podrá aplicarse la presente ley, sin embargo, quedan a salvo la opción del procedimiento judicial.
- A falta de recursos propios para llevar a cabo la prueba genética por parte del Estado, se pretende que la Secretaría de Salud lleve a cabo la acreditación y vigile a todas aquellas instituciones privadas que decidan realizar la prueba de comparativos genéticos para los efectos de la presente propuesta de ley.
- Tal y como lo menciona nuestra constitución local, "...los niños serán objeto de especial protección por parte de las autoridades. Toda medida o disposición protectora de la familia y de la niñez, se considerarán de orden público. El niño tiene derecho desde su nacimiento a que se le inscriba en el Registro Civil y a tener un nombre" el cual implica también su apellido, conocer su identidad, su origen, afiliación, así lo menciona también nuestra Ley de los Derechos Y Deberes de las Niñas, los Niños y los Adolescentes del Estado de Colima.
- Es importante resaltar que la propuesta de Ley de Asunción de Paternidad que hoy presento, se aprobó en el Estado de Tamaulipas con el nombre de Ley de Paternidad Responsable,

siendo este el primer Estado de la República en publicarla el 16 de diciembre del año 2004, dando buenos resultados en aquel Estado, como la agilización de los trámites administrativos para la alimentación de los menores y sobre todo ser reconocidos con un apellido, es decir, gozan de un derecho como es el de su identidad.

- Con la presente iniciativa procuro trasladar el procedimiento administrativo que se realiza ante el Registro Civil del Estado de Tamaulipas, con la finalidad de que ese mismo sea aplicado en nuestro Estado, estableciendo así una garantía más para los menores que no son reconocidos al momento de su nacimiento.

TERCERO.- Que esta Comisión dictaminadora se declara a favor de las acciones que tengan como finalidad proteger y asegurar el interés superior de las niñas y niños colimenses, mediante derechos como el ser reconocidos por sus progenitores, gozar de identidad y de paternidad. Sin embargo, después del estudio y análisis de la iniciativa materia del presente dictamen concerniente a la creación de la Ley de Asunción de Paternidad del Estado de Colima, esta Comisión dictaminadora sin lugar a dudas destaca su objeto, pero la estima inviable en los términos propuestos, así como inconveniente para una debida impartición de justicia, al proponer crear un procedimiento administrativo a cargo del Registro Civil para substanciar y resolver un procedimiento de carácter inminentemente judicial, ya que este órgano de gobierno carece de facultades jurisdiccionales para dirimir controversias entre particulares, como claramente lo establece el primer párrafo del artículo 34 BIS del Código Civil del Estado de Colima, que determina expresamente las facultades del Registro Civil, que son sólo las *de inscribir, autorizar, certificar y dar publicidad a los hechos y actos constitutivos o modificaciones del estado civil de las personas*, con lo que se aprecia que la naturaleza de dicha institución consiste en funciones meramente declarativas, en relación con actos del registro civil que quedan asentados en actas que hacen fe y, en algunas de ellas, se requiere de una resolución judicial que así ordene se registre dicho acto, mas no se encuentra facultada para declarar la existencia o inexistencia de un derecho, y en el caso del divorcio administrativo, sólo se le autoriza substanciar este procedimiento precisamente porque es voluntario y no existe controversia.

En este sentido, es relevante analizar la esencia y naturaleza del juicio de reconocimiento de paternidad, mismo que surge como consecuencia inherente de un conflicto de intereses jurídicos, por un lado, el derecho del menor a ser reconocido y gozar de la paternidad y por el otro, el derecho del demandado para conocer y tener certeza sobre su probable paternidad, conflicto que por lo elevado de los derechos que están en disputa, debe ser resuelto por un órgano jurisdiccional que cuente con el personal capacitado y especializado, la infraestructura suficiente y facultado por ley para resolver este tipo de controversias como sucede en la actualidad, no una institución que desde su creación no fue destinada ni revestida con estas facultades como lo es el Registro Civil, máxime cuando el Oficial del Registro Civil titular de esta institución, quien en el procedimiento de reconocimiento de paternidad propuesto en la iniciativa en estudio haría las veces de un juez de lo familiar, es un funcionario público que pudiera no contar con una carrera profesional formativa en leyes y substanciar procedimientos jurisdiccionales, pues no es un requisito de elegibilidad para acceder a esta función pública.

Asimismo, en el supuesto de que modificando la naturaleza del Registro Civil, se dispusiera a esta institución para substanciar y resolver los juicios de reconocimiento

de paternidad, lo más grave consistiría en que con la resolución de carácter administrativo que se emitiera para dirimir esta controversia, no se daría solución de fondo a la problemática del reconocimiento de la Paternidad, pues la iniciativa en estudio en contravención a los principios generales del derecho dispone que la referida declaración administrativa únicamente otorgará las obligaciones legales propias de la paternidad, pero no los derechos sobre la hija o hijo, efecto incongruente al vulnerar un derecho que es correlativo de una obligación, pues resulta contradictorio que si se está reconociendo una situación, en este caso la paternidad misma, que trae aparejados una serie de derechos y obligaciones, únicamente se quiera reconocer estas últimas y no los derechos, lo cual generaría que el padre se viera en la necesidad de instaurar otro procedimiento ante la Autoridad Judicial, originando un doble trámite que estimamos innecesario, además se debe tener el cuidado de que las leyes que aprobamos no lesionen derechos de ningún ciudadano, pues con esta disposición lejos de impulsar una paternidad responsable, se estaría impidiendo el desarrollo pleno de este derecho, al estarse afectando por ejemplo el derecho a la convivencia entre padre e hijo, por citar un ejemplo.

Por otra parte, esta Comisión que dictamina sostiene el criterio de privilegiar lo estipulado por el Código Civil vigente en el Estado, considerado éste como norma jurídica que recopila diversas instituciones jurídicas de una misma materia en un solo documento público. Por ello, y aunado a lo argumentado, se estima la inviabilidad de la iniciativa en estudio, en función de que actualmente es en nuestros Códigos Civil y Procesal Civil donde tradicionalmente se ha venido regulando la Institución Jurídica de la Paternidad.

En esta tesitura, es precisamente en nuestra Legislación Civil tanto sustantiva como procedimental donde se ha regulado y se debe seguir regulando la referida Institución Jurídica, a efecto de que no se pierda la coherencia de dichos ordenamientos, ello en atención a la necesaria vinculación de dicha figura jurídica con otras instituciones que también están previstas en los referidos ordenamientos, tales como los alimentos, o la patria potestad por mencionar algunas, y que esta Comisión considera que sólo se desarticularía la coherencia que hay en los mismos, ya que en un caso práctico se puede demandar jurisdiccionalmente el reconocimiento de la paternidad y como consecuencia de ello la fijación de una pensión alimenticia, posibilidad que dejaría de existir si le otorga facultades a la Oficialía de los registros Civiles desnaturalizando su función.

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente:

DICTAMEN

“ARTÍCULO ÚNICO.- Por los motivos y razonamientos expuestos en el Considerando Tercero, se desecha la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que crea la Ley de Asunción de Paternidad del Estado de Colima.

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se le dé el trámite legal respectivo debiéndose archivar el presente asunto como totalmente concluido, por haberse desechado la propuesta, dándose cuenta a la Dirección de Procesos Legislativos para la baja de dicha iniciativa.”